Capítulo quinto

Las estrategias de seguridad nacional y defensa en Iberoamérica en el siglo XXI

Francisco Márquez de la Rubia

Resumen

El documento analiza la evolución de las estrategias de seguridad y defensa en Iberoamérica en el siglo XXI, destacando un cambio conceptual hacia una seguridad ampliada que incluye amenazas no tradicionales como el crimen organizado, el terrorismo, la ciberseguridad y el cambio climático. Examina casos específicos —como Chile, Brasil, México, Argentina y Perú— y muestra cómo cada país adapta su política según su contexto político, económico e histórico. Chile intentó implementar la *Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa* (ENSYD) con enfoque multidimensional, aunque su aprobación parlamentaria fracasó. Brasil mantiene una estrategia de autonomía en la que prioriza la protección de la Amazonía y el desarrollo tecnológico-militar. México apuesta por un enfoque preventivo y social frente al crimen organizado. Argentina carece de una estrategia nacional de seguridad (ESN) formal, pero desarrolla su defensa mediante directivas periódicas. Por último, Perú adopta una política multisectorial con metas a 2030. El documento también realiza una comparación con España y Portugal que subraya las similitudes en seguridad ampliada y cooperación internacional, pero también las diferen-

cias marcadas en capacidades militares, financiación y relaciones civil-militares. En conclusión, aunque existe una tendencia común hacia la modernización y profesionalización, los desafíos estructurales y políticos condicionan la eficacia de las estrategias de seguridad en la región.

Palabras clave

Seguridad ampliada, Crimen organizado, Ciberseguridad, Defensa nacional, Cooperación internacional.

National security and defence strategies in Ibero-America in the 21st century

Abstract

This document examines the evolution of national security and defence strategies in Ibero-America in the 21st century, highlighting a conceptual shift toward «expanded security» that includes non-traditional threats such as organized crime, terrorism, cybersecurity, and climate change. It explores country-specific cases—Chile, Brazil, Mexico, Argentina, and Peru—each of which tailors its security policy based on its political, economic, and historical context. Chile attempted to implement a multidimensional National Security and Defence Strategy (ENSYD), though it failed to gain parliamentary approval. Brazil emphasizes strategic autonomy, focusing on protecting the Amazon and advancing military technology. Mexico promotes a preventive, socially-focused approach to organized crime. Argentina lacks a formal national security strategy but operates through updated defense directives. Peru follows a multisectorial policy aimed at 2030 goals. The document compares these strategies with those of Spain and Portugal, noting shared elements like expanded

security and international cooperation, alongside key differences in military capacity, financing, and civil-military relations. In conclusion, while the region shares a trend toward modernization and professionalization of defence policies, structural and political challenges continue to influence the effectiveness of national security strategies across Ibero-America.

Keywords

Expanded security, Organized crime, Cybersecurity, National defense, International cooperation.

Introducción

Las arquitecturas de seguridad y defensa en América Latina han sido testigo de profundas transformaciones a lo largo de las últimas décadas, marcadas por la evolución de las dinámicas regionales y globales. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, los países de la región han redefinido sus estrategias, estructuras y alianzas para responder a desafíos cada vez más complejos y multidimensionales. La seguridad nacional, tradicionalmente concebida desde una óptica militarista y centrada en la protección de las fronteras, ha dado paso a un enfoque más amplio que incorpora amenazas emergentes como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los ciberataques y las crisis humanitarias.

Estas transformaciones no han sido homogéneas. Cada nación ha desarrollado su propio modelo de seguridad y defensa, condicionado por factores históricos, políticos, económicos y sociales. Mientras algunos países han fortalecido sus instituciones militares bajo el amparo de políticas de cooperación internacional, otros han optado por estructuras más descentralizadas, lo que promueve la participación de fuerzas civiles y organismos multilaterales en la gestión de riesgos y conflictos.

Asimismo, la integración regional ha cobrado protagonismo en el diseño de estas arquitecturas con la creación de organismos como la Unasur y el Consejo de Defensa Suramericano, cuyo objetivo ha sido fomentar la cooperación y la confianza mutua en un continente históricamente marcado por disputas territoriales y diferencias ideológicas. No obstante, los desafíos persisten y la eficacia de estos mecanismos sigue siendo objeto de debate en un contexto donde los cambios políticos y las crisis internas de los países influyen de forma directa en su compromiso con la seguridad colectiva.

A lo largo de los próximos capítulos se explorará en detalle la evolución de las estrategias de seguridad y defensa en América Latina, analizando casos específicos, tendencias recientes y los retos que enfrenta la región en un escenario global cada vez más interconectado e impredecible. Al ser imposible, por razones de espacio editorial admisible, el análisis de todos y cada uno de los países del área, se abordan de forma más detallada los casos de países muy relevantes (por diferentes razones) y que son muy interesantes por su evolución normativa como Chile, Brasil, México, Argentina o Perú. También se hace una somera

comparación entre los instrumentos de planeamiento de estas naciones.

Se profundiza en cuestiones como: ¿es posible construir un sistema de seguridad regional cohesionado?, ¿cómo han influido las potencias extranjeras en la configuración de estas arquitecturas? y ¿cuál es el futuro de la defensa en un mundo donde las amenazas no solo provienen de conflictos convencionales, sino también del ciberespacio y la crisis climática?

Las respuestas a estas preguntas delinearán el panorama de la seguridad en América Latina en los años venideros.

1 Evolución conceptual

Por tradición, la defensa en América Latina se centraba en la protección del Estado frente a amenazas externas, con un enfoque predominantemente militar que respondía a la lógica de la Guerra Fría y las disputas ideológicas de ese periodo. Durante las décadas de los setenta y ochenta, muchas naciones de la región adoptaron políticas de seguridad centradas en el combate de enemigos internos, con un fuerte componente represivo, para lo cual encontraron justificación bajo la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos. Esto llevó a la implicación de las Fuerzas Armadas (FAS) en asuntos de seguridad interna, lo que suscitó tensiones en el debate democrático y acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos (Comblin, 1989: 11).

Con el fin de los conflictos ideológicos y la transición hacia democracias más estables en los años noventa, los países de América Latina comenzaron a reformar sus políticas de defensa, de forma que separaron de manera progresiva las funciones de las Fuerzas Armadas y las instituciones encargadas de la seguridad pública. Este cambio reflejaba el reconocimiento de la necesidad de limitar el uso de los militares a tareas de defensa exterior, por lo que se asigna a la policía y otros organismos civiles el control de la seguridad interna. No obstante, esta diferenciación ha sido difusa en contextos de crisis como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, donde la naturaleza de las amenazas trasciende fronteras y capacidades tradicionales.

En la actualidad, la región ha adoptado una concepción más amplia de la seguridad, conocida como «seguridad humana» o «seguridad ampliada», que incorpora aspectos como el bienestar económico, social y ambiental. Este enfoque reconoce que las

amenazas a la estabilidad ya no provienen solo de actores estatales o conflictos bélicos tradicionales, sino de desafíos multifacéticos como el cambio climático, los ciberataques, las pandemias y las migraciones masivas. Este cambio conceptual ha influido en la creación de nuevas arquitecturas de seguridad y defensa que integran múltiples actores, incluyendo organismos internacionales, ministerios y organizaciones de la sociedad civil (Rojas Aravena, 2012).

En suma, la evolución conceptual de la seguridad y la defensa en América Latina refleja un esfuerzo continuo por adaptarse a las realidades contemporáneas, donde la cooperación regional, la inclusión de perspectivas no tradicionales y el fortalecimiento de capacidades civiles se han convertido en pilares fundamentales para enfrentar los retos del siglo XXI.

2 Desafíos contemporáneos en las arquitecturas de seguridad y defensa en América Latina

América Latina se encuentra en un punto de inflexión en lo que respecta a sus estructuras de seguridad y defensa. Los desafíos que enfrenta son múltiples y cada vez más complejos, lo que refleja un panorama global en constante transformación. La interacción entre actores estatales y no estatales, el avance de economías ilícitas y la creciente influencia de potencias extrarregionales han complicado la capacidad de los Gobiernos para diseñar respuestas efectivas y coordinadas.

2.1 Crimen organizado transnacional: una guerra sin fronteras

El crimen organizado ha dejado de ser una amenaza local para convertirse en un fenómeno transnacional que desafía las capacidades soberanas de los Estados latinoamericanos. Redes de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero han permeado estructuras gubernamentales y debilitado el Estado de derecho en varias naciones. Con carteles operando a lo largo de corredores estratégicos que atraviesan desde la selva amazónica hasta los puertos de Centroamérica y México, las respuestas unilaterales han demostrado ser insuficientes (Rivera-Páez, 2020).

La necesidad de un enfoque multilateral es innegable. Como señaló Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de

Desarrollo, la lucha contra el crimen organizado requiere alianzas estratégicas, no solo entre los países de la región, sino también con actores globales que tengan la capacidad de rastrear y desmantelar los flujos financieros ilícitos que nutren estas redes[1]. Sin embargo, la cooperación internacional sigue siendo fragmentada, con algunas naciones priorizando acuerdos bilaterales con Estados Unidos, mientras que otras buscan autonomía en su política de seguridad.

2.2 Migración irregular: entre la seguridad y los derechos humanos

Los flujos migratorios han alcanzado niveles sin precedentes en América Latina, impulsados por crisis económicas, políticas y humanitarias. Venezuela, con más de siete millones de ciudadanos desplazados forzosos en el exterior, representa el mayor éxodo en la historia reciente de la región. A esto se suman movimientos migratorios desde Haití y Centroamérica, donde la combinación de violencia, pobreza y cambio climático obliga a miles a abandonar sus hogares.

Las respuestas estatales han oscilado entre la contención y la integración. Algunos Gobiernos han tratado de disuadir esta corriente endureciendo controles fronterizos y adoptando medidas restrictivas para desalentar la migración irregular. Sin embargo, la efectividad de estas políticas sigue siendo motivo de debate. Mientras algunos argumentan que reducen el incentivo para emprender viajes peligrosos, otros advierten que solo refuerzan las redes de tráfico de personas y aumentan las vulnerabilidades de los migrantes. Al mismo tiempo, la sobrecarga de los sistemas de acogida en países como Colombia, Ecuador y Perú pone de manifiesto las limitaciones de una respuesta regional descoordinada.

2.3 La injerencia de actores extrarregionales: ¿oportunidad o riesgo?

El reposicionamiento estratégico de potencias como China y Rusia en América Latina ha añadido una nueva capa de complejidad a las arquitecturas de seguridad de la región. Pekín, mediante su ambicioso programa de financiación e inversión en infraestruc-

[1] Véase: https://aduananews.com/dieciocho-paises-de-america-latina-y-el-caribe-se-unen-en-la-alianza-para-la-seguridad-y-el-desarrollo/

tura, ha logrado afianzar su presencia en sectores clave como telecomunicaciones, energía y logística. A la par, su creciente cooperación militar con países como Venezuela y Argentina plantea interrogantes sobre la autonomía regional en materia de defensa[23].

Por su parte, Rusia ha reforzado su influencia mediante acuerdos de venta de armamento y asistencia en inteligencia, lo que ha desafiado la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. Este reequilibrio geopolítico ofrece oportunidades económicas, pero también riesgos, ya que aumenta las tensiones en un contexto donde las alianzas militares (formales o informales) podrían redefinir los equilibrios de poder en la región.

En conjunto, estos desafíos ponen a prueba la capacidad de América Latina para construir una arquitectura de seguridad y defensa eficaz, resiliente y adaptada a las nuevas realidades globales. La disyuntiva entre respuestas nacionales y soluciones colectivas sigue siendo el dilema central. En un mundo donde las amenazas están cada vez más interconectadas, la fragmentación política podría convertirse en la mayor vulnerabilidad de la región.

3 El caso de Chile. Elaboración de la (fallida) estrategia de seguridad nacional (ESN)

Chile llevó a cabo un proceso destacable para desarrollar una estrategia de seguridad nacional, cuyo fracaso en el Parlamento merece ser analizado para comprender las dificultades de alcanzar consensos en un tema tan crucial. Este caso refleja los retos inherentes a la formulación de políticas de seguridad en un país con tensiones históricas y desafíos contemporáneos.

A continuación se analizará este complejo tema haciendo un recorrido temporal por la evolución de las políticas de seguridad y los principales obstáculos encontrados a la hora de articular una ESN, para desembocar en un análisis en profundidad de la ESN chilena 2012-2024.

---

2 Véase: https://www.infobae.com/venezuela/2024/06/22/crece-la-alianza-entre-venezuela-y-china-ambos-regimenes-firmaron-nuevos-acuerdos-de-cooperacion/?utm_source=chatgpt.com

3 Véase: https://www.wola.org/es/analysis/ee-uu-empuja-a-su-historica-aliada-en-sudamerica-hacia-china/

3.1 Antecedentes y evolución

Durante la etapa de la dictadura, la política de defensa estuvo centralizada en la figura presidencial, lo que relegaba al ministro de Defensa a un rol secundario. Con el retorno a la democracia, el ministerio recuperó protagonismo, hecho que abrió el debate sobre las responsabilidades de las Fuerzas Armadas (FAS) y del Estado en materia de seguridad. Se reemplazó el servicio militar obligatorio por un sistema profesional y mixto, y se estableció una financiación basada en el 10 % de las ventas de cobre, destinado de forma exclusiva a la adquisición de armamento, sin un límite superior.

Desde 2002, Chile publicó libros de defensa nacional en 2002, 2007 y 2010 que, si bien marcaron principios estratégicos, no constituyeron una estrategia integral. En 2013, la reforma de la ley del cobre ajustó la financiación militar a ciclos de revisión cada cuatro años, vinculando estos recursos a la estrategia de seguridad nacional sin abordar una visión más amplia de seguridad.

El país evolucionó del concepto de defensa nacional al de seguridad nacional con la *Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa* (ENSYD), que adoptó un enfoque de «seguridad ampliada», incluyendo amenazas transnacionales como terrorismo, crimen organizado, ciberataques y cambio climático. La estrategia buscaba definir responsabilidades públicas conforme a la Constitución y fomentar la cooperación interinstitucional.

En 2010, Chile creó un Estado Mayor Conjunto y asignó al JEMAD el mando de operaciones exteriores. Entre 2011 y 2012 se intentó formular la ENSYD, liderada inicialmente por el Ministerio de Defensa, lo que generó tensiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Subsecretaría de Defensa redactó el borrador, que después fue modificado por la Presidencia. En agosto de 2012, el presidente Sebastián Piñera presentó el documento al Senado, pero no fue aprobado debido a la falta de consenso político y deficiencias en su diseño.

El Comité Interministerial de Seguridad, encabezado por el presidente de la república e integrado por ministros clave, debía liderar este proceso, pero su rol fue marginal. La estrategia no contemplaba una ley de seguridad nacional que estableciera estructuras y responsabilidades claras, lo que limitó su efectividad. Inspirada en el modelo español, la ENSYD propuso inicial-

mente un consejero de Seguridad Nacional, que más tarde fue reemplazado por un consejo interministerial. Además, mientras la estrategia española distinguía entre riesgos y amenazas, la chilena solo abordaba amenazas, lo que evidenciaba una visión menos integral.

Un análisis en mayor profundidad de la *Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa* (ENSYD) de Chile 2012-2024[4]

Elaborada durante la administración de Sebastián Piñera, la ENSYD tenía el propósito de orientar y coordinar la seguridad y defensa nacional entre 2012 y 2024. Su objetivo principal era estructurar una política de seguridad eficiente ante amenazas tradicionales y emergentes estableciendo criterios estratégicos, capacidades de defensa, institucionalidad y financiación.

Al reconocer el impacto de la globalización y el avance tecnológico, la ENSYD identificó como principales desafíos el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques, las migraciones irregulares, la vulnerabilidad energética y la escasez de recursos naturales.

Sus objetivos fueron coordinar organismos nacionales en la seguridad del país, así como expresar la postura oficial de Chile ante sus desafíos internos y externos.

El documento se revisaría cada cuatro años con una planificación de doce años, guiado por cinco principios rectores: la protección de las personas como eje central, la relación entre seguridad y desarrollo, la complementariedad entre seguridad y defensa, la cooperación internacional como necesidad estratégica y la seguridad como política pública.

La ENSYD reconoce que el panorama de seguridad en el siglo XXI era altamente dinámico y estaba marcado por un nivel de interconexión sin precedentes. La globalización, el desarrollo tecnológico y la reconfiguración del equilibrio de poder han transformado la naturaleza de las amenazas, que exigen una respuesta más ágil y coordinada por parte de los Estados. En este contexto, la ENSYD analiza dos niveles de seguridad, global y regional, identificando las tendencias y desafíos que podrían afectar a Chile de forma directa a medio y largo plazo.

[4] Véase: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F15344%2F1%2FLa+Estrategia+Nacional+de+Seguridad+y+Defensa_v6.doc&utm

3.2 Seguridad global: un mundo en transformación

La ENSYD describe un escenario internacional caracterizado por una creciente incertidumbre estratégica, resultado de múltiples factores:

- El auge de nuevos actores y la redefinición del poder global: la emergencia de China como superpotencia económica y su creciente presencia en América Latina, junto con el resurgimiento de Rusia en el escenario geopolítico, han desafiado el orden internacional liderado por Estados Unidos y Europa. Esta nueva configuración de poder genera oportunidades, pero también tensiones y riesgos en materia de seguridad y defensa.
- Amenazas híbridas y guerra no convencional: el conflicto entre Estados ya no se limita a enfrentamientos militares tradicionales. Hoy en día, las amenazas incluyen ataques cibernéticos, desinformación, injerencias en procesos democráticos y el uso de actores no estatales como *proxies* en conflictos asimétricos.
- Terrorismo global y extremismo violento: aunque América Latina no es un epicentro de actividad terrorista, la ENSYD reconoce que las redes extremistas internacionales podrían utilizar la región como base de operaciones logísticas y financieras.
- Cambio climático y desastres naturales: las crisis medioambientales han pasado a ser un factor de seguridad de primer orden. Chile, con su extensa costa y alta vulnerabilidad sísmica, debe estar preparado para responder a fenómenos extremos, asegurando resiliencia y cooperación internacional en este ámbito.
- Disputa por recursos naturales: la escasez de agua, minerales estratégicos y energía ha llevado a conflictos interestatales en diversas regiones. Chile, como uno de los principales productores de litio y cobre a nivel mundial, podría verse afectado por estas dinámicas de competencia global.

En este contexto, la ENSYD subraya la importancia de mantener una política exterior activa, basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, lo que asegura que Chile pueda adaptarse a los cambios en el entorno global sin comprometer su estabilidad ni su soberanía.

3.3 Seguridad regional: América Latina en la encrucijada

A nivel regional, para la ENSYD América Latina presenta un escenario particular, caracterizado por la coexistencia de cooperación

y fragmentación en materia de seguridad. Si bien la región ha mantenido bajos niveles de conflictos interestatales en comparación con otras partes del mundo, enfrenta desafíos estructurales que afectan la estabilidad y el desarrollo.

Entre los aspectos más relevantes, la ENSYD destaca: la baja probabilidad de conflictos armados entre Estados (la región ha priorizado la resolución pacífica de disputas, con un marco normativo basado en tratados como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca [TIAR] y la OEA), los altos niveles de violencia criminal (América Latina alberga algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo, impulsadas por el crimen organizado, el narcotráfico y la debilidad de las instituciones judiciales), la presión sobre los recursos naturales y desafíos ambientales (la deforestación, la minería ilegal y la contaminación de fuentes hídricas han generado tensiones sociales y conflictos locales en países vecinos, lo que ha afectado la estabilidad regional) y, por último, la relevancia de Brasil y el desplazamiento del foco económico del Atlántico al Pacífico (la creciente importancia del eje Asia-Pacífico ha hecho que Chile refuerce sus relaciones comerciales y de seguridad con países como Perú, Colombia y México en un intento de posicionarse estratégicamente en la región).

Frente a estos desafíos, la ENSYD enfatiza la necesidad de fortalecer la cooperación con organismos como la Unasur, la Alianza del Pacífico y el Consejo de Defensa Suramericano, lo que promueve una visión de seguridad regional más coordinada y efectiva.

3.4 Intereses de seguridad de Chile en el mundo

Los intereses de seguridad de Chile no pueden definirse de forma exclusiva desde una perspectiva nacional. La estabilidad del país depende en gran medida de su entorno inmediato y de su posición en la comunidad internacional. En este sentido, la ENSYD establece una agenda de seguridad con tres grandes áreas geográficas prioritarias: América Latina, la Antártida y la región Asia-Pacífico.

Como país latinoamericano, Chile tiene un compromiso ineludible con la estabilidad de la región. La seguridad de América Latina es un factor crítico para el desarrollo nacional y su fragilidad podría afectar de manera directa la seguridad interna. En este contexto, la ENSYD establece como objetivos prioritarios: la protección de la democracia y la lucha contra la corrupción, el combate al nar-

cotráfico, el crimen organizado y el terrorismo; la respuesta ante desastres naturales; la protección de los recursos naturales y el medio ambiente; mantener América Latina libre de armas de destrucción masiva (fortalecer el régimen de no proliferación de armas nucleares en la región), y la cooperación en infraestructura y corredores bioceánicos (desarrollar proyectos estratégicos de integración física y conectividad regional).

Además, Chile mantiene un firme compromiso con la protección de la Antártida, no solo por razones geopolíticas, sino también por su relevancia científica y ecológica. La ENSYD establece una serie de directrices para garantizar la presencia activa del país en el continente blanco:

- Refuerzo del control sobre operaciones terrestres, marítimas y aéreas: asegurar la soberanía chilena en la región a través del monitoreo y la presencia permanente de bases científicas y militares.
- Protección del ecosistema antártico y sus recursos naturales: cumplimiento estricto del Protocolo de Madrid sobre Protección del Medio Ambiente en la Antártida.
- Expansión de bases científicas y exploración en la región: fomento de la investigación en climatología, biología marina y cambio climático.
- Defensa del Tratado Antártico como instrumento de cooperación internacional: garantizar que la Antártida siga siendo una zona desmilitarizada y dedicada exclusivamente a la ciencia y la paz.

En cuanto al área Asia-Pacifico, el crecimiento económico y la importancia geoestratégica de la misma han convertido a esta región en un eje clave para la seguridad chilena. La ENSYD reconoce la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación en los ámbitos de seguridad marítima y comercio internacional (protección de rutas comerciales clave y lucha contra la piratería), la cooperación con Australia y Nueva Zelanda en el Pacífico Sur (desarrollo de iniciativas conjuntas en seguridad marítima y cambio climático) y la participación en tratados de seguridad y respuesta ante desastres naturales (integración de Chile en organismos de gestión de crisis en el Pacífico).

3.5 Chile y la seguridad internacional

La seguridad de Chile no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un entramado global interdependiente. En un

mundo donde las amenazas trascienden fronteras y donde el poder se redistribuye de manera geopolítica, el posicionamiento internacional de Chile en materia de seguridad se convierte en una prioridad estratégica. La ENSYD reafirma el compromiso del país con el multilateralismo, lo que promueve la cooperación internacional como pilar fundamental para enfrentar los desafíos emergentes.

El fortalecimiento de organismos multilaterales, especialmente la ONU, es un eje clave de la política exterior chilena. En este sentido, Chile aboga por la modernización de estructuras internacionales que permitan una mejor respuesta ante amenazas contemporáneas, desde crisis humanitarias hasta ciberseguridad y terrorismo. El país ha mantenido una activa participación en operaciones de paz bajo el mandato de Naciones Unidas, contribuyendo con personal militar y civil en misiones en Haití, África y Medio Oriente.

Además, la ENSYD reconoce la importancia de fortalecer alianzas estratégicas con socios regionales y globales. En América Latina, Chile ha promovido la cooperación en materia de seguridad a través de la Alianza del Pacífico y otros foros multilaterales, apostando por mecanismos de defensa colectiva y fortalecimiento institucional. En el ámbito hemisférico, la colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido relevante en la lucha contra el crimen organizado y la promoción de la democracia.

Más allá del continente, Chile ha diversificado sus relaciones de seguridad con potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y países de Asia-Pacífico. En este último caso, la creciente importancia de la región ha llevado a Chile a participar en ejercicios de seguridad marítima, a cooperar con Australia y Nueva Zelanda en la estabilidad del Pacífico Sur y a fortalecer sus vínculos con Japón y Corea del Sur en ciberseguridad y tecnología militar.

A nivel global, el país sigue de cerca los conflictos en otras regiones y reconoce que los problemas de seguridad en Medio Oriente, Europa del Este y el Indopacífico pueden tener repercusiones en América Latina. La ENSYD enfatiza la necesidad de que Chile adopte un papel más activo en la diplomacia preventiva, promoviendo la resolución pacífica de disputas y el respeto al derecho internacional.

Para implementar una estrategia efectiva, la ENSYD propone una reestructuración institucional que garantice la coordinación interministerial, la eficiencia en la toma de decisiones y la adaptación

a nuevas amenazas. La creación de un «Comité Interministerial de Seguridad», encabezado por el presidente de la república e integrado por los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, es una de las reformas centrales. Este organismo tendría la misión de: coordinar políticas de seguridad y defensa a nivel nacional, evaluar las amenazas emergentes y proponer estrategias de respuesta, analizar inteligencia estratégica y definir prioridades de acción, y revisar de forma periódica los avances y ajustes de la ENSYD.

En paralelo, la estrategia propone la figura de un «consejero Nacional de Seguridad», encargado de asesorar al Gobierno en asuntos estratégicos y coordinar el comité interministerial. Su función sería similar a la de un asesor de Seguridad Nacional en otros países, lo que proporcionaría continuidad y visión técnica en la formulación de políticas de seguridad.

Otro elemento clave es la creación de un «Grupo de Trabajo de Seguridad Público-Privado», que permitiría la cooperación entre el Estado, el sector empresarial y la academia. La ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra el crimen organizado requieren un enfoque integrado, donde la experiencia del sector privado complemente las capacidades estatales.

Por último, la ENSYD contempla la «Comisión de Participación Ciudadana en Seguridad Nacional» con el objetivo de fortalecer la transparencia y el diálogo con la sociedad civil. La seguridad debe ser concebida como un esfuerzo colectivo, en el que los ciudadanos comprendan los desafíos estratégicos y participen en la formulación de respuestas.

3.6 Financiación y desarrollo de la defensa

Para garantizar la estabilidad financiera de la seguridad y defensa nacional, la ENSYD establece un enfoque financiero basado en:

- Presupuesto plurianual: asignaciones financieras a medio y largo plazo para evitar fluctuaciones políticas y garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos.
- Transparencia y eficiencia en el uso de recursos: implementación de mecanismos de auditoría para asegurar que el gasto en defensa responda a criterios técnicos y estratégicos.
- Inversión en tecnología y modernización: desarrollo de capacidades avanzadas en ciberseguridad, vigilancia satelital y sistemas de defensa integrados.

En el ámbito industrial, la estrategia busca potenciar la industria de defensa nacional promoviendo la alianzas público-privadas, incentivando la colaboración con empresas tecnológicas para la producción de equipamiento militar y sistemas de seguridad, y fomentando una regulación eficiente del sector, así como con la creación de normativa que permita un crecimiento sostenible y seguro de la industria de defensa.

En última instancia, la ENSYD destacaba la necesidad de que Chile desarrolle una visión a largo plazo en materia de seguridad, lo que asegura que las capacidades de defensa evolucionen en respuesta a los cambios geopolíticos y tecnológicos.

Esta visión se enmarcó con la presidenta Bachelet en la publicación del *Libro de la defensa nacional* de 2017[5].

4 Brasil: seguridad, defensa y evolución reciente

Para los observadores de la política exterior brasileña, el año 2023 será recordado como un año de expectativas incumplidas y realidades complejas. Pocas elecciones en el mundo generaron tanta expectación como la de Brasil a finales de 2022, cuando Luiz Inácio «Lula» da Silva logró un regreso al poder tras una reñida segunda vuelta contra Jair Bolsonaro. La ajustada victoria del 50,9 % sobre el 49,1 % reflejó la profunda polarización política del país y la difícil tarea que aguardaba al nuevo Gobierno[6]. Muchos esperaban que la transición trajera consigo una restauración de la diplomacia tradicional de Brasil, marcada por el apego al derecho internacional y el multilateralismo, y que representara un giro definitivo respecto al unilateralismo, las posturas nacionalistas y la indiferencia ambiental de la administración anterior.

Sin embargo, la realidad pronto demostró ser más matizada. Aunque la retórica de Lula dista de la de su predecesor, las continuidades estratégicas han sido más evidentes de lo que sus partidarios anticipaban. Su política exterior ha oscilado entre la reafirmación de principios históricos y la adaptación pragmática a las dinámicas globales. Un ejemplo claro ha sido su postura sobre la guerra en Ucrania: al evitar un alineamiento claro con Occidente y atribuir la responsabilidad del conflicto tanto a Rusia como a Ucrania, Lula generó desconcierto entre sus aliados euro-

[5] Véase: https://www.acanav.cl/wp-content/uploads/2021/08/LibroDefensa.pdf
[6] Véase: https://issuu.com/lajornadaonline/docs/diario31102022

peos y estadounidenses, que esperaban una condena más explícita de Moscú.

La relación con Estados Unidos también ha reflejado esta ambigüedad. Si bien Bolsonaro mantuvo afinidades ideológicas con Donald Trump, sus lazos con Washington nunca llegaron a desplazar la pragmática cooperación de Brasil con China. Lula ha seguido una línea similar, manteniendo una postura independiente y rechazando presiones externas. Su negativa a firmar el comunicado final de la Cumbre por la Democracia convocada por Joe Biden[7] y su preferencia por visitar China en el mismo periodo subrayaron su inclinación hacia una diplomacia multipolar, crítica de las políticas de la OTAN hacia Ucrania y de la influencia estadounidense en América Latina. A pesar de estas tensiones, Brasil ha logrado sostener una política internacional coherente, cimentada en principios a largo plazo que trascienden los cambios de liderazgo.

4.1 Una doctrina de seguridad en evolución

Brasil ha mantenido una política de seguridad y defensa estructurada en documentos clave como la Política Nacional de Defensa (PND)[8] y la Estrategia Nacional de Defensa (END)[9], actualizados de forma periódica para responder a los cambios geopolíticos. Desde su introducción en 2005 y sus revisiones en 2012 y 2020, la PND ha delineado los objetivos estratégicos fundamentales del país, enfatizando la soberanía nacional, la integridad territorial y la protección de recursos estratégicos, con especial énfasis en la Amazonía y el Atlántico Sur. La END, lanzada en 2008 y revisada en 2012 y 2016, complementa la PND con medidas específicas para el desarrollo de capacidades militares y tecnológicas.

Ambos documentos reflejan una visión de defensa orientada a la autonomía estratégica. La END prioriza la modernización de las Fuerzas Armadas, la inversión en la industria de defensa nacional y la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros. Brasil ha avanzado en el desarrollo de capacidades propias promoviendo la producción de aviones de combate Embraer

7 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61727420

8 Véase: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congressonacional_22_07_2020.pdf

9 Véase: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/estrategia-nacional-de-defesa-pdf

KC-390, submarinos con propulsión nuclear en cooperación con Francia y una expansión en su capacidad de ciberdefensa. La estrategia también reconoce nuevas amenazas, como el terrorismo transnacional, el crimen organizado y los desafíos de la ciberseguridad.

A nivel internacional, la diplomacia militar brasileña ha buscado consolidar su liderazgo regional y su proyección global. Su participación en misiones de paz de la ONU, como en Haití y el Líbano, ha reforzado su imagen como un actor responsable en la seguridad internacional. En África, Brasil ha intensificado sus lazos con países lusófonos como Angola y Mozambique promoviendo la cooperación en defensa, asistencia técnica y formación militar.

4.2 Seguridad regional y proyección estratégica

Brasil ha desempeñado un papel central en la configuración de la seguridad regional, pues apuesta por el multilateralismo como instrumento de estabilidad. Organizaciones como Unasur y el Consejo de Defensa Suramericano han servido como plataformas para la cooperación en defensa, aunque han enfrentado desafíos políticos con el declive de la integración sudamericana en los últimos años. A pesar de estos reveses, Brasil sigue abogando por el fortalecimiento de la coordinación regional en seguridad, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas en la cuenca amazónica.

El país también ha mostrado una postura firme en la defensa de sus intereses en el Atlántico Sur. La región ha adquirido una importancia creciente debido a la competencia internacional por recursos marinos y energéticos, y Brasil ha reforzado su presencia mediante una flota naval modernizada y patrullas más activas en sus zonas económicas exclusivas. Esta estrategia busca proteger los intereses brasileños en un contexto donde actores extrarregionales, incluidos China y Rusia, han intensificado su actividad en aguas sudamericanas.

Al mismo tiempo, Brasil ha sabido equilibrar su cooperación con las grandes potencias sin comprometer su autonomía. Aunque ha consolidado lazos con China en comercio y tecnología, mantiene cautela en iniciativas estratégicas como la expansión de los BRICS o los intentos de Uruguay de negociar acuerdos comerciales fuera del Mercosur. Este pragmatismo ha permitido a

Brasil preservar su margen de maniobra en un entorno global en transformación[10].

4.3 Desafíos internos y proyecciones futuras

A pesar de la solidez de su doctrina de seguridad, Brasil enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar su capacidad de consolidarse como un actor global influyente. La polarización política, intensificada tras las elecciones de 2022, ha erosionado la cohesión nacional y generado incertidumbre en la implementación de políticas de largo plazo. Las disputas entre el Gobierno central y sectores militares, así como los persistentes escándalos de corrupción, han debilitado la confianza en las instituciones de seguridad y defensa.

Además, la dependencia económica de Brasil en la exportación de materias primas sigue siendo una vulnerabilidad estructural. La volatilidad en los precios del petróleo, la soja y el mineral de hierro afecta la estabilidad financiera del país, lo que restringe la capacidad de inversión en defensa e innovación tecnológica. Sin una diversificación económica más robusta, el margen de maniobra de Brasil en el escenario global seguirá siendo limitado.

En el ámbito internacional, el país deberá navegar un entorno cada vez más competitivo. La rivalidad entre Estados Unidos y China, las transformaciones en América Latina y el auge de nuevas amenazas como la guerra híbrida y los ataques cibernéticos exigen una respuesta flexible y estratégica. La capacidad de Brasil para mantener su autonomía y fortalecer sus relaciones internacionales dependerá de su habilidad para adaptarse a estas dinámicas sin perder de vista sus objetivos de largo plazo.

En conclusión, el regreso del presidente Lula ha evidenciado tanto la continuidad como la evolución en la política de seguridad y defensa de Brasil. Aunque su administración ha introducido cambios en la retórica y en ciertas prioridades estratégicas, la base de su política exterior sigue anclada en principios tradicionales de autonomía, pragmatismo y multilateralismo.

Brasil ha logrado construir una estrategia de defensa que equilibra sus aspiraciones globales con su realidad regional. Sin embargo, la estabilidad de este enfoque dependerá de su capacidad para

[10] Véase: https://gatecenter.org/brics-ampliado-fortaleza-o-debilidad-bajo-el-liderazgo-chino/

superar los desafíos internos y consolidar su liderazgo regional en un mundo en transformación. La pregunta central sigue siendo si Brasil podrá convertir su peso económico y geopolítico en una influencia real y sostenida en el ámbito internacional.

5 México y sus políticas de seguridad en la etapa Sheinbaum

México ha desarrollado una *Estrategia Nacional de Seguridad*[11] que integra aspectos de seguridad y defensa nacional y responde a las complejas amenazas que enfrenta el país. Esta estrategia no solo busca fortalecer las capacidades del Estado en el combate a la criminalidad y la protección de la soberanía, sino que también promueve un enfoque preventivo basado en la atención a las causas estructurales de la violencia.

Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es la prevención a través del desarrollo social, pues reconoce que la violencia y la inseguridad no pueden combatirse solo con el uso de la fuerza, sino que requieren abordar las causas que las propician. En este sentido, el Gobierno ha impulsado programas enfocados en la generación de empleo, el acceso a la educación y el bienestar social con la intención de reducir la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población ante el crimen organizado y la delincuencia común.

En paralelo, se ha buscado consolidar y profesionalizar la Guardia Nacional como una institución clave para la seguridad pública. Su despliegue en todo el territorio nacional tiene el propósito de garantizar una presencia efectiva del Estado en regiones donde la criminalidad ha erosionado la autoridad gubernamental. Para ello, se ha puesto énfasis en la capacitación y el equipamiento de sus elementos, así como en la mejora de su coordinación con otras fuerzas de seguridad.

Otro aspecto esencial en esta estrategia es el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación. La creación del Sistema Nacional de Inteligencia ha permitido mejorar la capacidad del Estado para detectar y neutralizar los riesgos antes de que se materialicen en amenazas reales, con un enfoque particular en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. La integración de tecnología avanzada en labores de vigilancia, ciberseguridad y análisis de datos ha sido un componente clave para hacer más efectiva esta labor.

[11] Véase: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-estrategia-nacional-de-seguridad

Asimismo, la estrategia enfatiza la necesidad de una estrecha colaboración entre el Gobierno federal y las entidades federativas y reconoce que la seguridad pública requiere un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno. La descentralización de políticas y la adaptación de estrategias racionales a las necesidades específicas de cada región en un escenario de gobernanza multinivel han permitido una respuesta más eficiente ante la diversidad de desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad.

En el ámbito de la defensa nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha desarrollado el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2024-2030, continuación del Plan Nacional de Desarrollo 2020[12]. Este programa establece directrices específicas para incrementar la operatividad y eficiencia del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos para asegurar que sus capacidades estén en armonía con las exigencias contemporáneas. La modernización de equipamiento, la mejora en la capacitación de los efectivos militares y la optimización de la logística operativa han sido áreas prioritarias en este esfuerzo.

Estos alineamientos reflejan un enfoque integral de México en materia de seguridad y defensa que no solo responde a los graves desafíos actuales del país, sino que también busca establecer bases sólidas para garantizar la estabilidad y la paz a largo plazo. La combinación de políticas de prevención, fortalecimiento institucional y cooperación entre administraciones, seguimiento de las políticas del anterior presidente, aspira a posicionar a México en ruta hacia una mayor resiliencia frente a las amenazas internas y externas que afectan a su seguridad nacional; algo muy importante en estos momentos en que EE. UU. presiona en relación con la seguridad en la frontera común y el tráfico de estupefacientes.

6 Argentina: estructuras y organización diferenciadas. Retos comunes

Argentina no cuenta con un documento tipo «estrategia de seguridad nacional». Sin embargo, el país desarrolla su política de defensa a través de diversos documentos y directivas que establecen alineamientos estratégicos en esta materia.

[12] Véase: https://transparencia.sedena.gob.mx/pdf/Programa_Sectorial_2020-2024/PROGRAMA_SECTORIAL_2020-2024.pdf

Uno de los principales instrumentos es la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN)[13], que se actualiza de forma periódica para reflejar las prioridades y enfoques del Gobierno de turno. Por ejemplo, la DPDN de 2021 aborda el diagnóstico del escenario de defensa global y regional, define la política de defensa nacional y establece directrices para su implementación.

Además, la Ley de Defensa Nacional[14] establece que la defensa nacional es «la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo». Esta ley tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la nación argentina, su integridad territorial y capacidad de decisión autónoma, así como proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

En julio de 2021, el Gobierno argentino publicó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional[15], que incluye un diagnóstico del escenario de defensa global y regional, y establece directrices para la instrumentación de la política de defensa nacional y la correspondiente política militar.

Recientemente, en enero de 2025, el nuevo presidente argentino Javier Milei emitió decretos que permiten a las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos de seguridad interior[16], una decisión arriesgada que ha generado debate y preocupación entre diversos sectores de la sociedad, sin duda ante la sombre de periodos históricos anteriores de doloroso recuerdo.

Por tanto y aunque Argentina no posee una ESN unificada, implementa su política de defensa a través de leyes, directivas y programas que, como se ha comentado, establecen los alineamientos estratégicos para garantizar la seguridad y defensa del país.

En ese sentido, la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2021 de Argentina establece los lineamientos estratégicos para la defensa del país para adaptarse a las dinámicas del

[13] Véase: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246990/20210719

[14] Véase: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm

[15] Véase: https://www.infobae.com/opinion/2021/08/30/directiva-de-politica-de-defensa -nacional-2021-mas-de-lo-mismo/

[16] Véase: https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5116118/milei-amplia-capacidades-accion-fuerzas-armadas-nuevo-decreto

entorno global y regional. A continuación se analizará con mayor detalle este instrumento.

La directiva se organiza en tres capítulos principales:

1. «Diagnóstico y apreciación del escenario de defensa global y regional»: en él se reconoce una configuración internacional compleja y multipolar en la que se destaca la competencia entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia; se enfatiza el traslado del poder global hacia la cuenca del Pacífico, de forma que se incremente su relevancia geopolítica, y, a nivel regional, se reafirma a América del Sur como una zona de paz, subrayando la importancia estratégica del Atlántico Sur y la cuestión de las Islas Malvinas.
2. «Política de defensa nacional: concepción y posicionamiento estratégico»: aquí se orienta el Sistema de Defensa Nacional hacia un modelo basado en la disuasión de agresiones, definiendo la defensa como autónoma y cooperativa; y se establece la misión principal del instrumento militar en la protección de la soberanía y la integridad territorial, incluyendo misiones complementarias en operaciones multilaterales y apoyo a la comunidad nacional.
3. «Directrices para la instrumentación de la política de defensa nacional y de la política militar»: se instruye al Ministerio de Defensa en la formulación de planes para el desarrollo de capacidades tecnológicas y militares autónomas, para lo que se promueve la inversión en la industria de defensa nacional; se destaca la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas, adaptándolas a nuevos desafíos como la ciberdefensa y el terrorismo transnacional, y se promueve una cultura institucional de respeto a los derechos humanos incorporando perspectivas de género y lucha contra la discriminación en los espacios educativos y de formación dentro de la jurisdicción.

La DPDN 2021 enfatiza la importancia de la cooperación regional y multilateral, y busca fortalecer organismos de defensa en América del Sur para contribuir a la seguridad global basada en el diálogo y normas compartidas. Reconoce la relevancia estratégica del Atlántico Sur, ya que considera que su posición geopolítica es clave para el acceso a la Antártida y a las rutas marítimas entre los océanos Pacífico y Atlántico. Por último, se subraya la necesidad de desarrollar capacidades en sistemas de comando, control, comunicaciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (C4I2VR), así como en sistemas satelitales y ciberdefensa.

En resumen, aunque Argentina aún no cuenta formalmente con una estrategia de seguridad nacional, existe un reconocimiento creciente de su importancia para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad y defensa.

7 Perú: un desarrollo de las políticas de seguridad desde una óptica multisectorial

Perú ha desarrollado su política de seguridad y defensa nacional a través de diversos documentos estratégicos que buscan garantizar la soberanía, integridad territorial y bienestar de su población.

Aprobada en julio de 2022, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (PNMSDN 2030)[17] establece un marco integral para abordar las amenazas y desafíos en materia de seguridad y defensa. Este documento promueve la coordinación entre diferentes sectores del Estado para enfrentar riesgos como desastres naturales, ciberataques y crimen organizado. La política se centra en fortalecer las capacidades nacionales y fomentar la cooperación internacional para mantener la paz y seguridad en el país.

La estrategia de seguridad del Perú se define como defensiva-disuasiva, donde la acción militar a través de las Fuerzas Armadas es considerada el último recurso, que se emplea de forma exclusiva en defensa del país. Esta postura busca garantizar la independencia, soberanía e integridad del Estado para asegurar que la población goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

En abril de 2024 se evaluó la preparación de la PNMSDN 2030 ante amenazas emergentes como las guerras híbridas y la transformación digital. Este análisis resaltó la necesidad de actualizar las políticas de seguridad y defensa para incluir medidas que enfrenten de forma eficaz estas nuevas formas de conflicto, lo que asegura una respuesta adecuada del Estado peruano.

La PNMSDN 2030 define tres objetivos prioritarios:

1. Garantizar la defensa de los intereses nacionales destinados a la paz y seguridad internacionales.

[17] Véase: https://www.gob.pe/institucion/mindef/informes-publicaciones/3212559-politica-nacional-multisectorial-de-seguridad-y-defensa-nacional-al-2030

2. Garantizar el normal funcionamiento de la institucionalidad política, jurídica y social en el país.
3. Alcanzar las condiciones necesarias que contribuyan a la seguridad nacional.

Para alcanzar estos objetivos, la política establece catorce denominados «servicios públicos», entre los cuales destacan: la educación con aprendizajes orientados a una cultura de paz, seguridad e identidad nacionales; la asistencia técnica en instrumentos técnicos y mecanismos de gestión en el Sistema de Defensa Nacional (SIDENA); la formulación del planeamiento por capacidades en las entidades componentes del SIDENA en los ámbitos externo e interno; las operaciones y acciones en seguridad con la participación integral de los componentes del SIDENA, y el fortalecimiento de la infraestructura pública para que sea efectiva frente a las amenazas y preocupaciones que podrían afectar la seguridad nacional.

Según el *Informe de Evaluación de la PNMSDN 2030*[18] correspondiente al año 2023, se ha logrado un avance significativo en la implementación de la política. Los tres objetivos prioritarios alcanzaron niveles de cumplimiento superiores al 95 % de lo esperado, lo que refleja un compromiso efectivo de las entidades involucradas.

Sin embargo, se reconoce que siguen existiendo áreas que requieren mayor atención, como la necesidad de fortalecer las oficinas de seguridad y defensa nacional (OSDENA) en todo el país y mejorar la articulación entre los diferentes componentes del SIDENA.

Un análisis realizado en abril de 2024 por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) señaló la importancia de que la PNMSDN 2030 aborde amenazas emergentes como las guerras híbridas y la transformación digital[19]. El estudio recomendó actualizar la política para incluir medidas que enfrenten de manera eficaz estas nuevas formas de conflicto, de forma que se asegure una respuesta adecuada del Estado peruano.

La PNMSDN 2030 representa un esfuerzo integral del Estado peruano para coordinar acciones multisectoriales en materia de seguridad y defensa. Si bien se han logrado avances significati-

[18] Véase: https://www.mindef.gob.pe/informacion/transparencia/INF%20EVAL%20SYE%202023%2011JUN24_2.pdf

[19] Véase: https://ceeep.mil.pe/2024/04/04/preparacion-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-seguridad-y-defensa-nacional-al-2030-del-peru-ante-amenazas-de-transformacion-digital-y-guerras-hibridas/

vos en su implementación, es fundamental continuar adaptando la política a los desafíos contemporáneos y fortalecer la cooperación entre las diversas entidades involucradas para garantizar la seguridad y bienestar de la nación.

En resumen, Perú ha establecido una política de seguridad y defensa nacional que busca adaptarse a los desafíos actuales y futuros, con el objetivo de promover una estrategia defensiva-disuasiva y fomentar la colaboración multisectorial para garantizar la seguridad y bienestar de su población.

8 Comparación entre las diferentes políticas de defensa

Las estrategias nacionales de seguridad y defensa en Sudamérica presentan similitudes y diferencias significativas dado que cada país enfrenta desafíos específicos y responde a ellos según su contexto geopolítico, económico y social. A continuación se analizan los aspectos similares y diferentes entre la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa de Chile y las estrategias de algunos países, en concreto Brasil, Argentina, Colombia y Perú.

8.1 Similitudes

A pesar de las diferencias geopolíticas y de desarrollo militar entre los países sudamericanos, hay varios elementos comunes en sus estrategias nacionales de seguridad y defensa.

8.1.1 Enfoque en seguridad ampliada y multidimensional

La mayoría de los países han adoptado un enfoque ampliado de seguridad, integrando amenazas no tradicionales como:

- Crimen organizado y narcotráfico (sobre todo en Brasil, Colombia y Perú).
- Ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
- Migraciones ilegales y crisis humanitarias (notable en Chile y Colombia debido a la migración venezolana).
- Desastres naturales y cambio climático (clave para Chile, Perú y Brasil).

8.1.2 Cooperación internacional

Los países sudamericanos enfatizan la cooperación en seguridad y defensa regional:

- Chile, Argentina y Brasil participan en misiones de paz de la ONU.
- Colombia mantiene una cooperación militar estrecha con EE. UU. y la OTAN (como socio global).
- La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a través de su Consejo de Defensa Suramericano, busca fortalecer la integración en defensa.
- Chile y Argentina destacan su compromiso con la Antártida, mientras que Brasil y Colombia enfatizan su presencia en la Amazonía como prioridad estratégica.

8.1.3 Defensa de la soberanía y territorialidad

Todos los países mencionan la protección del territorio nacional como su principal misión de defensa. Sin embargo:

- Chile y Argentina refuerzan la vigilancia del espacio marítimo y antártico.
- Brasil prioriza la protección de la Amazonía y recursos naturales.
- Colombia y Perú centran su estrategia en la lucha contra insurgencias y el narcotráfico.

8.1.4 Enfoque en modernización y capacidades militares

Países como Brasil, Chile y Colombia han adoptado un modelo de planificación basado en capacidades estratégicas, similar al enfoque de la OTAN, lo que asegura que sus fuerzas armadas sean adaptables, polivalentes e interoperables.

Chile destaca por su enfoque en capacidad conjunta de las Fuerzas Armadas, algo que Brasil también impulsa con su estrategia nacional de defensa (END).

8.2 Diferencias

A pesar de las similitudes, hay diferencias notables en la orientación y prioridades de las estrategias de defensa en Sudamérica.

8.2.1 Diferencias en la percepción de amenazas

Los países sudamericanos no enfrentan las mismas amenazas y, por lo tanto, sus estrategias varían en énfasis:

- Chile y Argentina ponen más énfasis en amenazas como desastres naturales, crisis energéticas y ciberseguridad.

- Colombia y Perú priorizan la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los grupos insurgentes (como el ELN y los remanentes de Sendero Luminoso).
- Brasil enfatiza la defensa de la Amazonía y los recursos naturales, además de proyectar su fuerza a nivel global.
- Venezuela ve la seguridad desde una perspectiva de «defensa de la soberanía contra amenazas externas» (en particular de EE. UU.), con una estructura militar muy centralizada y politizada.

Chile tiene una visión más pragmática de la seguridad, enfocada en la estabilidad regional y la cooperación internacional, mientras que otros países como Venezuela o Bolivia politizan más la defensa.

8.2.2 Diferencias en la financiación

- Brasil tiene el presupuesto de defensa más alto de Sudamérica y desarrolla una industria de defensa con capacidades avanzadas (como Embraer y el submarino nuclear en cooperación con Francia).
- Chile financia su defensa con un sistema plurianual, transparente y basado en capacidades estratégicas.
- Colombia ha dependido durante décadas del apoyo de EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
- Argentina y Perú han tenido dificultades de financiación recurrentes, con períodos de obsolescencia militar por falta de inversión.

8.2.3 Diferencias en la relación civil-militar

- Chile y Argentina han avanzado en la separación entre la política y las Fuerzas Armadas, lo que promueve una institucionalidad democrática. Chile ha logrado consolidar un modelo de defensa profesional y técnico.
- Colombia mantiene una relación estrecha entre las fuerzas encargadas de la seguridad interna y las fuerzas propiamente militares debido al conflicto continuado con grupos insurgentes.
- Venezuela y Bolivia han politizado sus fuerzas armadas y las han subordinado a la línea ideológica de sus Gobiernos.

Con relación a la planificación de las políticas de seguridad y de defensa, la mayor parte de los países comparten similitudes como el énfasis en seguridad multidimensional, modernización militar

y cooperación internacional. Sin embargo, se presentan también diferencias clave:

1. Mientras que Chile tiene un enfoque financiero técnico y estable basado en planificación plurianual, otros países como Argentina o Perú han tenido dificultades de financiación militar.
2. Colombia y Perú se centran en el crimen organizado y narcotráfico, mientras que Chile prioriza ciberseguridad, cooperación internacional y desastres naturales.
3. Chile y Argentina mantienen ejércitos profesionales y apolíticos, a diferencia de Venezuela o Bolivia, donde la política tiene una fuerte injerencia en la defensa.
4. Brasil busca ser una potencia regional, mientras que Chile enfatiza la cooperación regional y estabilidad.

En general, la estrategia chilena es una de las más técnicas, bien planificadas y orientadas a la seguridad internacional y la prevención de conflictos, que se diferencia de países que enfrentan amenazas internas más inminentes, como Colombia, o de aquellos que politizan su defensa, como Venezuela.

9 Análisis comparativo de las estrategias nacionales de seguridad y defensa en Iberoamérica (Sudamérica, España y Portugal)

La institucionalización y normativa de la seguridad y defensa en Iberoamérica varía de forma amplia en función de las amenazas percibidas, las capacidades militares, la integración con organismos internacionales y las prioridades estratégicas de cada país.

A continuación se realiza un análisis comparativo de las estrategias de seguridad y defensa de los principales países de la región, en el que se destacan similitudes y diferencias en aspectos clave.

Para realizar una comparación efectiva se analizan las siguientes variables para cada documento:

1. Enfoque estratégico general (seguridad ampliada vs. seguridad tradicional).
2. Principales amenazas identificadas (narcotráfico, terrorismo, ciberseguridad, desastres naturales, etc.).
3. Estructura de la financiación de la defensa (transparencia, estabilidad presupuestaria).
4. Relación con organismos internacionales (OTAN, ONU, Unasur, CELAC, etc.).

5. Industria de defensa y capacidades militares (dependencia externa vs. autosuficiencia).
6. Rol de las Fuerzas Armadas en la política interna (autonomía vs. influencia gubernamental).
7. Participación en operaciones internacionales de paz y seguridad.

País	Enfoque estratégico	Principales amenazas	Financiación	Relaciones internacionales	Industria de defensa	Rol militar en política	Operaciones internacionales
España	Seguridad ampliada	Terrorismo, ciberseguridad, crimen organizado, desastres naturales	Presupuesto estable, parte de la OTAN	OTAN, UE, ONU	Industria avanzada (Navantia, Airbus)	Apolitización total	Alta participación en la OTAN y ONU
Portugal	Seguridad ampliada	Ciberseguridad, crimen transnacional, amenazas marítimas	Moderada, dentro de la OTAN	OTAN, UE, ONU	Moderada, centrada en cooperación	Apolitización total	Participación en misiones de la OTAN y ONU
Brasil	Seguridad ampliada con enfoque en soberanía y recursos naturales	Amazonía, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal	Presupuesto alto, inversiones en modernización	BRICS, ONU, Mercosur, Unasur	Industria desarrollada (Embraer, submarino nuclear)	Independiente del Gobierno pero con influencia política	Misiones de paz de la ONU y liderazgo en América Latina
Argentina	Seguridad ampliada pero con capacidades limitadas	Narcotráfico, ciberseguridad, desastres naturales	Baja financiación, crisis recurrentes	ONU, Mercosur, CELAC	Industria debilitada, falta de inversión	Separación de la política desde 1983	Misiones de paz de la ONU, pero con menos capacidad operativa
Chile	Seguridad ampliada y modernización militar	Ciberseguridad, desastres naturales, crimen transnacional	Financiación estable y plurianual	ONU, APEC, Mercosur	Industria en crecimiento, con énfasis en asociaciones público-privadas	Apolítica y profesionalizada	Misiones de la ONU y cooperación con EE. UU. y la UE
Colombia	Seguridad interna enfocada en crimen organizado	Narcotráfico, terrorismo, insurgencias, crimen transnacional	Dependencia de EE. UU. y cooperación internacional	OTAN (socio global), EE. UU., ONU	Industria emergente, con cooperación extranjera	Ejército con fuerte rol interno por el conflicto armado	Misiones de la ONU, pero prioriza seguridad interna
México	Seguridad interna con fuerte rol militar	Narcotráfico, crimen organizado, terrorismo interno	Variable, con militarización de la seguridad pública	ONU, CELAC, APEC, EE. UU.	Dependiente de compras extranjeras	Ejército con fuerte influencia en seguridad interna	Participación limitada en misiones de paz
Venezuela	Seguridad tradicional con enfoque en «defensa de la soberanía»	Amenazas externas (EE. UU.), narcotráfico, crisis interna	Opaca, la crisis económica afecta el sector	Rusia, China, CELAC	Industria en declive, depende de importaciones rusas y chinas	Politización extrema de las FF. AA.	Escasa participación internacional

Tabla 1. Comparación por país

9.1 Similitudes en las estrategias de seguridad y defensa en Iberoamérica

A pesar de la diversidad de contextos políticos, económicos y sociales que caracterizan a los países de Iberoamérica, existen varios aspectos en los que sus estrategias de seguridad y defensa convergen. Las similitudes observadas responden tanto a desafíos comunes en la región como a la influencia de tendencias globales en materia de seguridad que han llevado a estos países a adoptar enfoques cada vez más integrales y multidimensiona-

les. En general, la seguridad ya no se concibe solo en términos de defensa militar tradicional, sino que incorpora una gama más amplia de amenazas, riesgos y desafíos, lo que requirie una planificación más flexible y una mayor cooperación entre distintos actores estatales e internacionales.

Uno de los puntos en común más relevantes es la adopción del *enfoque de seguridad ampliada*, que ha reemplazado de forma progresiva la visión clásica de defensa nacional centrada en conflictos interestatales. En la actualidad, las estrategias de seguridad de los países de la región incluyen una variedad de riesgos y desafíos no convencionales, como el crimen organizado, el terrorismo, la ciberseguridad y los desastres naturales. España y Portugal han puesto un énfasis particular en la protección contra el terrorismo y los ciberataques, alineándose con las prioridades estratégicas de la OTAN y la Unión Europea. En América Latina, el narcotráfico y el crimen transnacional han pasado a ocupar un lugar central en las políticas de seguridad, sobre todo en países como Colombia y México, donde la violencia vinculada a estos fenómenos ha sido una amenaza constante para la estabilidad interna. Chile y Brasil también han incorporado la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas dentro de sus estrategias de defensa en reconocimiento del creciente impacto que las tecnologías digitales tienen en la seguridad nacional.

Otro elemento que comparten la mayoría de los países iberoamericanos es *la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa*. En Europa, España y Portugal participan de forma activa en las iniciativas de la OTAN, lo que les ha permitido fortalecer sus capacidades militares y mantener una integración operativa con sus aliados. En América Latina, aunque no existe un bloque de defensa con la misma solidez, varios países han priorizado la cooperación con organismos internacionales. Brasil ha liderado misiones de paz de la ONU y ha promovido la integración regional en foros como la Unasur y el Mercosur. Chile ha establecido acuerdos de cooperación con países como Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, de forma que ha consolidado su inserción en el sistema internacional de defensa. Colombia ha dado un paso más allá al convertirse en el único país latinoamericano con estatus de *socio global de la OTAN*, lo que le ha permitido acceso a entrenamiento, tecnología y cooperación con países miembros de la alianza. Incluso Argentina, a pesar de sus restricciones presupuestarias, ha mantenido una participación en misiones de paz de la ONU. Aunque algunos países como México han sido más

reticentes en su implicación en la seguridad global, la tendencia general en la región ha sido fortalecer la cooperación con actores internacionales.

La protección de la *soberanía y la integridad territorial* es otra prioridad común en las políticas de defensa de los países de la región. En términos generales, todas las naciones iberoamericanas han diseñado sus fuerzas armadas para garantizar la protección de sus fronteras y su espacio marítimo y aéreo. En Sudamérica, Chile y Argentina han prestado especial atención a la vigilancia de la región antártida, mientras que Brasil ha enfocado sus esfuerzos en la protección de la Amazonía, dada su riqueza en recursos naturales y su importancia geopolítica. España y Portugal, por su parte, han reforzado su capacidad de patrullaje en el Mediterráneo y el Atlántico para proteger sus aguas territoriales y sus rutas de comercio marítimo. Aunque la probabilidad de conflictos armados entre países en la región es baja, la defensa de la soberanía sigue siendo la misión fundamental para todas las fuerzas militares iberoamericanas.

Otro aspecto en el que coinciden los países de la región es la importancia otorgada a la *modernización y el desarrollo de capacidades militares*. Aunque el nivel de inversión es dispar entre países, la tendencia general ha sido avanzar hacia una estructura militar más flexible, interoperable y tecnológicamente avanzada. Brasil ha liderado en este aspecto con el desarrollo de un submarino nuclear y su industria aeronáutica a través de Embraer, mientras que España ha consolidado su industria de defensa con empresas como Navantia y Airbus. Chile ha apostado por un sistema de financiación estable y plurianual para garantizar la modernización sostenida de sus fuerzas armadas. En el caso de Colombia y México, la modernización ha estado más enfocada en mejorar la capacidad de respuesta interna frente al crimen organizado, con la adquisición de tecnologías de vigilancia, drones y equipos de inteligencia. Aunque algunos países, como Argentina y Venezuela, han experimentado dificultades en la actualización de su equipamiento militar debido a restricciones económicas, el consenso general en la región es que las fuerzas armadas deben adaptarse a las nuevas dinámicas de seguridad y modernizarse para responder con mayor eficacia a los desafíos del siglo XXI.

Por último, una característica común en la mayoría de los países de la región es la consolidación de un modelo de *defensa basado en la profesionalización y separación de la política*. España y Portugal han mantenido este principio desde hace déca-

das, con fuerzas armadas totalmente subordinadas al poder civil. En América Latina, Chile y Argentina han logrado mantener una estricta separación entre la política y el estamento militar desde el retorno a la democracia, para asegurarse de que las fuerzas armadas se enfoquen solo en su labor de defensa y nunca en la participación política. Brasil, aunque con algunas preocupantes excepciones en los últimos años, también ha mantenido la autonomía institucional en su aparato militar. En contraste, algunos países como Venezuela han seguido un camino diferente, con una politización extrema de las fuerzas armadas, lo que ha generado tensiones en su función dentro del sistema de gobierno.

En síntesis, es posible encontrar patrones comunes que reflejan la evolución de la seguridad en la región. La adopción de una visión de *seguridad multidimensional,* la creciente importancia de la *cooperación internacional*, la modernización de las *capacidades militares* y la profesionalización de las *fuerzas armadas* son tendencias compartidas por la mayoría de los países analizados. Estos elementos han permitido a Iberoamérica avanzar en la construcción de estrategias de defensa más adaptadas a los desafíos contemporáneos, lo que asegura que sus fuerzas armadas sean más eficientes, coordinadas y preparadas para enfrentar tanto amenazas tradicionales como emergentes en un mundo cada vez más interconectado.

9.2 Diferencias en las estrategias de seguridad y defensa en Iberoamérica

A pesar de la tendencia general en la región hacia una seguridad ampliada y la adopción de modelos de defensa más integrales, existen diferencias sustanciales entre los países de Iberoamérica en la forma en que planifican, financian y ejecutan sus estrategias de seguridad y defensa. Estas diferencias surgen de diversos factores, como los riesgos percibidos, el acceso a recursos financieros, la relación histórica entre las fuerzas armadas y la política, así como el nivel de integración de cada país en el sistema internacional de defensa.

Uno de los contrastes más marcados se encuentra en la estructura de financiación de la defensa y las capacidades militares de cada país. España y Brasil destacan como los países con los presupuestos más elevados, lo que les ha permitido desarrollar industrias militares avanzadas y mantener fuerzas armadas modernas con capacidad de proyección regional y global.

España, gracias a su integración en la OTAN y la Unión Europea, ha logrado construir un sistema de defensa altamente sofisticado con acceso a tecnologías de última generación y una planificación estratégica sólida. Brasil, por su parte, ha optado por una estrategia de autonomía en defensa, invirtiendo en el desarrollo de su propia industria militar, con proyectos ambiciosos como la fabricación de un submarino nuclear y la expansión de Embraer en el sector aeroespacial. Sin embargo, en el resto de Sudamérica, la situación es distinta. Mientras que Chile ha establecido un modelo financiero estable y plurianual que le ha permitido mantener una fuerza militar bien equipada y moderna, Argentina y Perú han sufrido periodos de recortes presupuestarios que han afectado de forma significativa sus capacidades operativas. En el caso de Venezuela, la crisis económica ha erosionado su capacidad de defensa, lo que la ha hecho dependiente de importaciones/ayuda de armamento de Rusia y China, sin posibilidad de desarrollar una industria propia sostenible.

Otro factor diferenciador es la relación entre las fuerzas armadas y el Gobierno, la cual varía de manera considerable entre los países de la región. España, Portugal, Chile y Argentina han consolidado modelos de defensa en los que las Fuerzas Armadas operan con autonomía institucional y están desvinculadas de la política por completo. En estos países, los militares cumplen de forma exclusiva un rol profesional, subordinado al poder civil, lo que ha permitido estabilidad en la gobernanza de la seguridad y la defensa. En cambio, en Brasil, aunque las fuerzas armadas no están involucradas de forma directa en la política gubernamental, han mantenido una influencia notable en la seguridad nacional y en ciertas decisiones estratégicas del Estado. En Colombia y México, la situación es aún más compleja, ya que las fuerzas armadas han adquirido un papel preponderante en la seguridad interna debido a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En estos países, la seguridad pública ha sido militarizada, lo que ha generado debates sobre los riesgos que esto conlleva para los derechos humanos y la gobernanza democrática. En el extremo opuesto, Venezuela representa el caso más politizado de la región, donde las fuerzas armadas han sido cooptadas por completo por el régimen y funcionan como un pilar fundamental del poder político, lo que las aleja del modelo de una defensa profesional y autónoma.

En cuanto a la participación en operaciones internacionales, las diferencias también son significativas. España y Portugal, como

miembros de la OTAN, tienen un papel activo en misiones de paz y seguridad colectiva, por lo que colaboran en operaciones en Europa, África y Medio Oriente. Brasil, a pesar de no ser miembro de la OTAN, ha buscado posicionarse como un actor relevante en la estabilidad internacional liderando, por ejemplo, la misión de paz de la ONU en Haití y participando en otras iniciativas multilaterales. Chile y Argentina, con recursos más limitados, también han contribuido a misiones de la ONU, aunque con menor protagonismo y capacidades más restringidas. En contraste, Colombia y México han participado en menor medida en misiones de paz, ya que sus esfuerzos se han centrado en la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado. Por último, Venezuela ha optado por el aislamiento en términos de cooperación militar internacional, limitando su participación en organismos de defensa regionales y priorizando relaciones bilaterales con aliados como Rusia y China.

Las diferencias en las prioridades estratégicas y amenazas percibidas son otro elemento distintivo en la región. Mientras que España y Portugal consideran el terrorismo, la ciberseguridad y las amenazas híbridas como sus principales desafíos, los países latinoamericanos han adoptado enfoques más diversos según su contexto particular. Brasil ha puesto un fuerte énfasis en la protección de la Amazonía y sus recursos naturales, mientras que Chile ha desarrollado una estrategia enfocada en la seguridad marítima, la estabilidad regional y la ciberseguridad. Colombia y México han basado sus estrategias en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y las insurgencias armadas, lo que ha condicionado el despliegue de sus fuerzas de seguridad y ha determinado una estructura de defensa altamente orientada hacia el control del orden interno. Venezuela, en cambio, ha construido su narrativa de seguridad en torno a la idea de una amenaza externa permanente, en especial proveniente de Estados Unidos, lo que ha llevado a un énfasis en la defensa del régimen más que en la protección efectiva de la población frente a desafíos reales.

Las diferencias entre los países de Iberoamérica en materia de seguridad y defensa reflejan la diversidad de realidades políticas, económicas y sociales que coexisten en la región. Mientras que algunos países han avanzado hacia modelos de defensa profesionalizados, con estrategias basadas en la cooperación internacional y la modernización tecnológica, otros han enfrentado limitaciones en financiación, politización de sus fuerzas militares y desafíos internos que han condicionado su enfoque de segu-

ridad. Estas diferencias seguirán marcando el desarrollo de las estrategias de defensa en los próximos años, en un contexto en el que las amenazas globales emergentes —como la ciberseguridad, el cambio climático y el crimen transnacional— exigirán respuestas más integradas y adaptativas.

Conclusiones

El análisis comparativo de las estrategias de seguridad y defensa en los principales países de Iberoamérica revela una diversidad de enfoques determinados por sus contextos geopolíticos, históricos y económicos. A pesar de existir una tendencia general hacia una seguridad ampliada, donde las amenazas tradicionales como conflictos interestatales han cedido espacio a fenómenos transnacionales como el crimen organizado, la ciberseguridad y el terrorismo, la manera en que cada nación aborda su seguridad varía de forma significativa en función de sus necesidades y capacidades.

1. En España y Portugal, la seguridad y defensa están muy integradas en el marco de la OTAN y la Unión Europea, lo que les otorga acceso a tecnologías avanzadas, cooperación internacional y planificación estratégica a largo plazo. España, en particular, ha desarrollado una industria de defensa sólida con empresas como Navantia y Airbus, y participa de forma activa en misiones de paz y seguridad en Europa, África y el Medio Oriente. Portugal, aunque con un presupuesto más reducido, sigue un modelo similar y contribuye de manera regular a las misiones de la OTAN. En estos países, la seguridad nacional está enmarcada en una visión multilateralista en la cual la defensa se concibe como un compromiso colectivo dentro de alianzas estratégicas. Además, sus Fuerzas Armadas son completamente profesionales y apolíticas, lo que garantiza su estabilidad institucional y su alineación con el Estado democrático.
2. Brasil, por su parte, adopta una estrategia de seguridad y defensa con una fuerte orientación hacia la protección de su soberanía y recursos naturales, en especial la Amazonía. A diferencia de España y Portugal, Brasil busca consolidarse como un actor autónomo en materia de defensa, evitando depender por completo de alianzas como la OTAN y promoviendo su industria militar, con proyectos como el desarrollo de un submarino nuclear y la expansión de Embraer

en el sector aeronáutico. Sin embargo, esta autonomía no implica aislamiento, ya que el país participa en misiones de paz de la ONU y en foros de cooperación como la Unasur y el Mercosur. La relación de las Fuerzas Armadas brasileñas con el Gobierno ha sido históricamente compleja, con una presencia más activa en la política en comparación con España o Portugal, aunque sin llegar a la politización extrema observada en países como Venezuela.

3. Chile ha desarrollado una de las estrategias de defensa más técnicas, transparentes y financieramente estables de la región. A diferencia de Argentina o Perú, que han sufrido fluctuaciones en la financiación de sus fuerzas militares, Chile mantiene un presupuesto plurianual que le permite una modernización sostenida de sus capacidades. Su enfoque estratégico está basado en la cooperación internacional, sobre todo en el Pacífico Sur y en América Latina, donde participa de forma activa en ejercicios conjuntos y misiones de paz. A pesar de no ser miembro de la OTAN, Chile ha establecido estrechas relaciones con actores occidentales, incluyendo EE. UU. y la UE, lo que le ha permitido acceder a tecnología y entrenamiento de alta calidad. Sus Fuerzas Armadas han mantenido una estricta separación de la política desde el retorno a la democracia en 1990, de modo que se ha consolidado como una institución muy profesionalizada.
4. Argentina, en contraste, enfrenta desafíos significativos en la modernización de su defensa debido a restricciones económicas y políticas. Si bien la seguridad ampliada es parte de su estrategia, con un énfasis en el narcotráfico y la ciberseguridad, la falta de inversión ha afectado su capacidad operativa. La cooperación internacional sigue siendo un pilar de su política de defensa, con participación en misiones de paz de la ONU, aunque con capacidades limitadas. Desde la recuperación democrática en 1983, Argentina ha mantenido una separación clara entre las Fuerzas Armadas y la política para evitar la influencia militar en la toma de decisiones gubernamentales, lo que ha contribuido a la consolidación de su democracia.
5. Colombia y México comparten una característica fundamental en sus estrategias de defensa: el rol predominante de sus Fuerzas Armadas en la seguridad interna, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En Colombia, la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y remanentes de las FARC ha obligado al país a man-

tener una estructura de seguridad muy militarizada, con una cooperación estratégica con EE. UU. y un estatus especial como socio global de la OTAN. México, aunque no enfrenta insurgencias de la misma manera que Colombia, ha recurrido cada vez más a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia del narcotráfico, lo que ha generado debates sobre la militarización de la seguridad pública. En ambos países, la seguridad interna sigue siendo la principal prioridad, lo que ha limitado su proyección internacional en términos de misiones de paz o participación en organismos multilaterales de defensa.

6. Venezuela representa un caso atípico en la región, con una estrategia de seguridad basada en una visión de «defensa de la soberanía» frente a supuestas amenazas externas, en especial de EE. UU. A diferencia de otros países, donde las Fuerzas Armadas operan bajo un esquema de autonomía institucional, en Venezuela han sido muy politizadas, por lo que se alinean directamente con el Gobierno de turno. Esto ha llevado a un deterioro de sus capacidades militares, exacerbado por la crisis económica y la dependencia de armamento proveniente de Rusia y China. A diferencia de Brasil, que busca autonomía con una industria militar propia, Venezuela se ha convertido en un importador de tecnología militar sin desarrollar una capacidad industrial independiente. Su participación en organismos internacionales de seguridad es mínima y su alineación con actores como Rusia y China la ha distanciado de los foros de cooperación de defensa latinoamericanos.
7. En términos generales, el panorama de seguridad y defensa en Iberoamérica es heterogéneo. España y Portugal lideran en integración internacional, modernización y estabilidad institucional dentro de la OTAN y la UE. Brasil sigue una estrategia de autonomía regional, con un enfoque en la defensa de la Amazonía y el desarrollo de su industria militar. Chile, con una planificación financiera estable y una política de cooperación internacional, es un referente en seguridad y defensa técnica en América Latina. Colombia y México han adoptado modelos de seguridad interna militarizados debido a la amenaza del crimen organizado, mientras que Argentina enfrenta dificultades en la modernización de su defensa por restricciones económicas. Venezuela, en el extremo opuesto, ha politizado su aparato de defensa y ha sufrido un colapso en su capacidad operativa.

8. A futuro, las estrategias de seguridad y defensa en Iberoamérica dependerán en gran medida de la capacidad de los países para adaptarse a nuevas amenazas como la ciberseguridad, el cambio climático y el crimen transnacional. Mientras que naciones como España, Portugal, Brasil y Chile han avanzado en la modernización y profesionalización de sus fuerzas armadas, otros países aún enfrentan retos en términos de financiación, gobernanza y estabilidad política. La cooperación internacional seguirá siendo un factor clave para la seguridad de la región, ya sea a través de alianzas con la OTAN, la ONU o acuerdos bilaterales entre países vecinos.

Bibliografía

Calderón, P. (2016). *Ciberseguridad y Defensa Nacional*. Editorial Tecnológica.

Comblin, J. (1989). *Doctrina de seguridad nacional*. Nueva Década.

Cordero, J. (2018). *Narcotráfico y Seguridad en América Latina: Análisis y Estrategias*. Siglo XXI.

Delgado, M. (2017). *Crimen Organizado en América Latina*. Universidad de los Andes.

Donadio, M. (2010). *Atlas comparativo de la defensa en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires, RESDAL.

Donadio, M. y Tibletti, M. D. (2014). *Atlas comparativo de la defensa en América Latina y Caribe*. Buenos Aires, RESDAL.

Dudley, S. S. (2011). Central America besieged: cartels and maras country threat analysis. *Small Wars & Insurgencies*. 22(5), pp. 890-913.

Feaver, P. (1999). Civil-Military Relations. *Annual Review of Political Science*. 2, pp. 211-241.

Fernández, C. (2021). *La Política de Seguridad en el Cono Sur*. FLACSO.

Fernández, P. (2024). *Política de Seguridad y Geopolítica Latinoamericana*. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Flores, A. (2021). *Seguridad Internacional y Defensa Nacional*. Instituto de Defensa Estratégica.

Goldfajn, I. (2024). La lucha contra el crimen organizado. En: Banco Interaramericano de Desarrollo (ed.). *Informe anual 2024. Estados financieros*.

González, R. (2019). *Estrategias de Defensa en América Latina*. Fondo de Cultura Económica.

Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: the theory and politics of civil-military relations*. Cambridge, Harvard University Press.

Iglesias, B. (1999). Militares y democracia en América Latina de los 90: una revisión de los condicionantes legales e institucionales para la subordinación. En: Diamant, R. C. (ed.). *Control civil y fuerzas armadas en las nuevas democracias latinoamericanas*.

Jarrín, E. M. (1988). The Impact of World Crisis on Geopolitical Conflicts. En: Silva Michelena, J. A. (ed.). *Latin America peace, democratization and economic crisis*. Nueva Jersey, Universidad de las Naciones Unidas.

Kennan, G. (1950). Memorandum by the Counselor (Kennan) to the Secretary of State. *Foreign Relations of The United States*. VII.

—. (2004). Moralidad y política exterior. *Política Exterior*. 18(100), pp. 53-70.

Kourliandsky, J. J. (2010). Nuevas amenazas, un concepto relativo. *La Vanguardia*. 84, pp. 84-85.

Laguerre, M. (1993). *The Military and Society in Haiti*. Londres, Macmillan.

López, J. I. (2008). La geopolítica de Nicolas Spykeman. *Revista Universidad EAFIT*. 97, pp. 79-88.

Martínez, L. (2020). *Seguridad y defensa en el siglo XXI: Desafíos y Perspectivas*. Editorial Gedisa.

Muñoz, G. (2019). *Seguridad Multidimensional y Cooperación Internacional*. Editorial Losada.

Ortega, J. (2020). *Geopolítica del Crimen en América Latina*. Instituto de Ciencias Políticas.

Palomares, G. (2016). América Latina en transformación, en un sistema internacional en cambio. *Revista Sistema*, pp. 242-243.

Quiroga, F. (2023). *El Rol de las Fuerzas Armadas en Democracia*. Universidad de Buenos Aires.

Ramírez, J. (2022). *Amenazas Híbridas y Guerra No Convencional*. Instituto de Estudios Estratégicos.

Rivera-Páez, S. I. (2020). *Crimen organizado transnacional y dimensiones culturales en América Latina*. Escuela Superior de Administración Pública.

Rojas Aravena, F. (2001). *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. FLACSO.

—. (2012). *Seguridad humana: nuevos enfoques*. FLACSO.

Romero, H. (2015). *Migración y Seguridad en América Latina*. Ediciones UBA.

Sánchez, A. (2014). *Seguridad Humana en el Contexto Latinoamericano*. Universidad Nacional de Colombia.

Serrano, M. (2017). *Crimen Organizado y Seguridad Regional*. Universidad Nacional Autónoma de México.

Torres, V. (2021). *Seguridad y Defensa en el Contexto Contemporáneo*. Instituto de Estudios Estratégicos de Chile.

Valenzuela, P. (2019). *Evolución de la Seguridad Nacional en América Latina*. Editorial Sudamericana.

Zúñiga, F. (2023). *Crisis Humanitarias y Seguridad en el Siglo XXI*. Editorial Ariel.